



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D. C., once (11) de agosto de dos mil veinte (2020)

RADICADO: 11001-33-35-026-2020-00060-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
DEMANDANTE: JAIRO ALBERTO LEGRO PIRAGUA
Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN

En el presente asunto, **JAIRO ALBERTO LEGRO PIRAGUA, YOLANDA CASTILLO BARRERA, ESTEFANY MONTES RIVERA, ANDRES MARTINEZ PARRA, ALBA PATRICIA SALAZAR COTE, OLGA LUCIA PIEDRAHITA DUQUE, GLORIA SERRATO FAJARDO, CARLOS AUGUSTO RIVEROS MORALES, AMANDA GUTIERREZ MONTEALEGRE, MARIA CLEOFEE HEWITT RAMIREZ, OCTAVIANO CASAS SANCHEZ y JAIME EDUARDO ROMERO GARAY** presentaron demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la **NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, con el objeto de obtener la nulidad de los actos por medio de los cuales les fue negado la inclusión de la bonificación de actividad judicial como factor salarial para la liquidación de la totalidad de prestaciones sociales.

No obstante lo anterior, es necesario manifestar que existe causal de impedimento que impide la prosecución del presente asunto por parte del suscrito Juez, de conformidad con las siguientes,

CONSIDERACIONES

Los artículos 130 y 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se encargaron de consagrar las causales generales y especiales de impedimento de los Magistrados y Jueces en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de establecer el procedimiento en caso de evidenciarse la configuración de alguna de aquellas; los mentados enunciados normativos disponen:

***“Artículo 130. Causales.** Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil¹ (...)*

¹ Debe entenderse la remisión normativa al Código General del Proceso.

Artículo 131. Trámite de los impedimentos. Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:

1. El juez administrativo en quien concurra alguna de las causales de que trata el artículo anterior deberá declararse impedido cuando advierta su existencia, expresando los hechos en que se fundamenta, en escrito dirigido al juez que le siga en turno para que resuelva de plano si es o no fundado y, de aceptarla, asumirá el conocimiento del asunto; si no, lo devolverá para que aquel continúe con el trámite. Si se trata de juez único, ordenará remitir el expediente al correspondiente tribunal para que decida si el impedimento es fundado, caso en el cual designará el juez ad hoc que lo reemplace. En caso contrario, devolverá el expediente para que el mismo juez continúe con el asunto.

2. Si el juez en quien concurra la causal de impedimento estima que comprende a todos los jueces administrativos, pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se fundamenta. De aceptarse el impedimento, el tribunal designará conjuez para el conocimiento del asunto.

(...)

7. Las decisiones que se profieran durante el trámite de los impedimentos no son susceptibles de recurso alguno.”

A su vez el artículo 141 del Código General del Proceso, determina las hipótesis en las cuales los magistrados y jueces de la república, deben declararse impedidos por encontrarse incursos en causales de recusación.

En efecto dispone la norma:

“Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, **interés directo o indirecto en el proceso.”**

Conforme a lo expuesto, es pertinente señalar que en mi condición de titular del Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, se configura la causal de impedimento, la cual además se torna en general frente a la integridad de los Jueces Administrativos. Lo anterior en razón a que el objeto de discusión del presente proceso es el carácter salarial del porcentaje devengado a título de “bonificación por actividad judicial”, que no ha sido tenido en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales.

Recuerda el Despacho, que el Decreto 3131 del 2005, **“Por el cual se establece una bonificación de actividad judicial para jueces y fiscal”**, incluyó dentro de los destinatarios de la bonificación aludida a los Jueces categoría circuito, determinando las condiciones para su reconocimiento y la forma de remuneración en los siguientes términos:

“Artículo 1°. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 3382 de 2005. A partir del 30 de junio de 2005, créase una bonificación de actividad judicial, sin carácter salarial, que se pagará semestralmente el 30 de junio y 30 de diciembre de cada año, como un reconocimiento económico al buen desempeño de los funcionarios que ejerzan en propiedad los siguientes empleos:

Denominación del cargo	Valor Bonificación Semestral
Juez Municipal	\$5,280,000
Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía	\$5,280,000
Juez de Instrucción Penal Militar	\$5,280,000
Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo	\$4,147,638
Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía.	\$5,280,000
Juez del Circuito	\$5,443,350
Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana	\$5,443,350
Fiscal Delegado ante Juez del Circuito	\$3,986,256
Fiscal ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana	\$5,443,350
Juez Penal del Circuito Especializado	\$5,917,188
Coordinador de Juzgado Penal del Circuito Especializado	\$5,917,188
Juez de Dirección o de Inspección	\$5.917 188
Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección	\$5,917,188
Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado	\$4,293,660

En las mismas condiciones, tendrán derecho a percibir esta bonificación de actividad judicial, los Procuradores Judiciales I que desempeñen el cargo en propiedad y que actúen de manera permanente como Agentes del Ministerio Público ante los servidores que ocupan los empleos señalados en este artículo.”

Por su parte, el Decreto 1000 de 2019, “Por el cual se reajusta la bonificación de actividad judicial para jueces y fiscales”, estableció:

ARTÍCULO 1. Bonificación de actividad judicial. A partir del 1° de enero de 2019, reajustar el valor de la bonificación de actividad judicial de que tratan los Decretos 3131 y 3382 de 2005, así:

Denominación del cargo	Valor Bonificación semestral
Juez Penal del Circuito Especializado	11.494.488
Coordinador de Juzgado Penal del Circuito Especializado	11.494.488
Juez de Dirección o de Inspección	11.494.488
Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección	11.494.488
Procuradores Judiciales I, adscritos a las Procuradurías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia para la Casación e Investigación y Juzgamiento Penal.	11.494.488
Juez del Circuito	10.574.031
Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana	10.574.031
Fiscal ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana	10.574.031
Juez Municipal	10.256.716
Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía	10.256.716
Juez de Instrucción Penal Militar	10.256.716
Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de	10.256.716

Denominación del cargo	Valor Bonificación semestral
Policía	
Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado	8.340.692
Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo	8.057.035
Fiscal Delegado ante Juez del Circuito	7.743.544

En las mismas condiciones, tendrán derecho a percibir esta bonificación de actividad judicial, los Procuradores Judiciales I que desempeñen el cargo y que actúen de manera permanente como Agentes del Ministerio Público ante los servidores que ocupan los empleos señalados en este artículo.”

Con base en lo anterior, los Jueces Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá, percibimos la denominada **“bonificación por actividad judicial”** y en virtud de esa circunstancia nos asiste interés directo en las resultas del proceso, **pues tal bonificación se encuentra reglada en el mismo instrumento normativo por lo que se podría llegar a considerar como legítima la reclamación relativa a que dicho emolumento sea constitutivo de salario para la liquidación de prestaciones sociales y demás prestaciones económicas derivadas de la actividad de administración de justicia, razón por la cual se configura la causal de impedimento.**

La anterior consideración, se expone en concordancia con los recientes pronunciamientos del Consejo de Estado. Alto Tribunal, que en providencia del 27 de septiembre del 2018, con radicado número: **25000-23-42-000-2016-03375-01(2369-18)**, Consejera Ponente, **SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ**, dispuso:

“Ahora bien, como se expuso, la actora está regulada por el régimen especial de la Fiscalía General de la Nación, en cuyo artículo 4º ibídem contempló la denominada «prima especial, sin carácter salarial»; por consiguiente, se encuentra contemplada en una disposición diferente a aquella que contempló dicho emolumento para los magistrados, entre otros, del Consejo de Estado, pues de ello se ocupó el legislador a través del artículo 15 de la Ley 4ª de 199210. De lo anterior, se extrae que si bien una y otra prima especial se encuentran reguladas en instrumentos normativos diferentes, lo cierto es que el objeto de discusión en este proceso es el carácter salarial del porcentaje devengado a título de prima especial de servicios, que no ha sido tenido en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales, lo que podría conllevar a un beneficio para los Magistrados que integran esta Corporación.

(...)

Por lo anterior, los integrantes de esta Sala de Sección consideramos que nos encontramos inmersos en la causal de impedimento prevista en el numeral 1º del artículo 14112 del Código General del Proceso, texto aplicable por la integración normativa especial del artículo 130 del CPACA13, el cual consagra lo siguiente: «1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, **interés directo o indirecto en el proceso.**»

La intervención como jueces de conocimiento, afectaría la posición de neutralidad que debe caracterizar al funcionario judicial. El interés indirecto que tiene el conjunto de magistrados en la actuación judicial, hace que no se preserve la idoneidad suficiente que podría llevar a alterar el juicio de los funcionarios, restándole eficacia a los atributos de independencia, equilibrio e imparcialidad que deben determinar la función judicial.

Por ello, resulta razonable y necesario, en procura de preservar estos valores y conforme a la ley, los suscritos Consejeros de Estado sean marginados del conocimiento de este proceso.

En consecuencia y por comprender el impedimento a la totalidad de los Magistrados que integran la Sección Segunda que es la competente para conocer exclusiva y privativamente del asunto, se ordenará remitir el impedimento a la Sección Tercera del Consejo de Estado para que decida la aceptación o no del mismo, tal como lo establece el numeral 4° del artículo 131 de la Ley 1437 de 2011.”²

De este modo, es claro que el hecho constitutivo de ser destinatarios de la misma prestación laboral, compromete mi imparcialidad como Titular del Despacho y administrador de justicia. Circunstancia por la cual considero que el impedimento tiene alcance colectivo por encontrarse los demás Jueces Administrativos bajo las mismas circunstancias de carácter general, por lo que se pone a consideración del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el impedimento expresado en la presente providencia y en consecuencia se separe del conocimiento del asunto a los Jueces Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá.

En merito de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO.- DECLÁRESE IMPEDIDO el suscrito Juez, para conocer del presente asunto, por asistir interés directo en las resultas del proceso, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 130 de la Ley 1437 de 2011, y el artículo 141 de la Ley 1564 de 2012, de conformidad con las consideraciones expresadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- REMITIR el expediente al Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para lo de su competencia, de conformidad con el numeral 2° del artículo 131 de la Ley 1437 de 2011, a efecto de que si lo estima procedente, designe el respectivo conjuez.

TERCERO.- Por Secretaría, déjense las anotaciones pertinentes y realícese la respectiva compensación del expediente ante la Oficina de Apoyo Judicial.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

CA

² CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B.
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ



**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en **ESTADO ELECTRÓNICO** notifico a las partes la providencia anterior hoy **12 DE AGOSTO DE 2020**, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)

**LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA
SECRETARIA**

Firmado Por:

**ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO
JUEZ CIRCUITO**

JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-CUNDINAMARCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**a1675918069dd4f8167216b377ccb07a68d2c51bdfc30ddd098734c0a5d05e8
2**

Documento generado en 11/08/2020 12:40:31 p.m.